

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: OMAR DE JESUS ARANGO OTALVARO
DEMANDADO :	: COLPENSIONES, Y PROTECCION S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-008-2019-00388-01
RADICADO INTERNO	: 055-21
DECISIÓN	: ADICIONA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 093

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia los recursos de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la ineficacia del traslado realizado al RAIS a la AFP PROTECCION S.A y en consecuencia se declare que este nunca se trasladó al RPM, y se CONDENE a PROTECCION S.A a trasladar todos los aportes a Colpensiones y a esta ultima a recibir y validar los mismos y a reconocer y pagar la pensión de vejez desde el cumplimiento de los requisitos, los intereses moratorios y las costas del proceso.

Como supuestos facticos manifestó que nació el 29 de marzo de 1954 por lo que tenía mas de 40 años de edad para el 01 de abril de 1994, siendo beneficiario del régimen de transición, y que se afilió por primera vez para los riesgos de invalidez, vejez y muerte al ISS, realizando cotizaciones desde el 15 de julio de 1974 hasta el día 31 de marzo del año 2000, acreditando 252,86 semanas cotizadas. Que, para el 2 de marzo de 2000, se trasladó al RAIS específicamente al fondo de pensiones y cesantías PROTECCIÓN S.A., realizando cotizaciones desde el 1 de abril del año 2000 hasta el 28 de febrero de 2019, acreditando en total 972.86 semanas cotizadas a la AFP PROTECCIÓN S.A, y que además acredita en total 1.477.86 semanas cotizadas en ambos regímenes, según historia laboral actualizada por PROTECCIÓN S.A, al día 6 de mayo de 2019. Que para el 25 de julio de 2005 contaba con 795 semanas y más de 1000 semanas a marzo de 2014, cuando

cumplió 60 años de edad. Que el traslado a PROTECCION S.A ocurrió sin que se le haya dado la debida información y sin que le haya puesto en conocimiento las consecuencias e implicaciones de dicho traslado, ni se le realizó una proyección comparativa de la pensión en ambos regímenes. Así mismo indica que a pesar de que se realizó re-asesoría pensional para el día 28 de noviembre de 2005, la misma fue errónea y se le indujo a quedarse en PROTECCIÓN S.A. Que el 22 de febrero de 2019 presentó reclamación a Colpensiones por lo que se encuentra agotada la reclamación administrativa.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 15 de octubre de 2020, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, DECLARO la ineficacia del traslado que realizó el señor OMAR DE JESUS ARANGO OTALVARO, a PROTECCIÓN S.A. y que le asiste derecho a acceder a los beneficios del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. ORDENO a PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES, todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, cuotas de administración, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C. C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado; precisando que esto se debería gestionar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. ORDENO a COLPENSIONES, a recibir los aportes provenientes de PROTECCIÓN S.A. y tener como afiliado al demandante. ORDENO a COLPENSIONES a reconocer y pagar la pensión de vejez al señor OMAR DE JESUS ARANGO OTALVARO, a partir del 1 de marzo de 2019, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, teniendo en cuenta 13 mesadas al año. ORDENO a COLPENSIONES reconocer al demandante a título de RETROACTIVO PENSIONAL generado entre el 1 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, la suma de \$107.378.090. AUTORIZO a Colpensiones, descontar de dicha suma los descuentos de salud, del pensionado. ORDENO a Colpensiones que, al momento del pago de la prestación económica, reconozca al actor, la indexación de las mesadas pensionales y ABSOLVIO a COLPENSIONES, de los intereses moratorios. DECLARO NO PROBADA la excepción de prescripción. CONDENO en costas a PROTECCIÓN S.A., y fijo como agencias en derecho la suma de \$877.803 a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor del actor.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de Protección S.A interpone recurso de apelación solo en lo relacionado a la orden de traslado a Colpensiones de lo descontado por gastos de administración y seguros, lo anterior toda vez que, según esta, dichos conceptos son descuentos autorizados por ley, y opera en ambos regímenes. Que además obra como prueba en el expediente certificado de rendimientos donde se observa que los aportes obtuvieron una ganancia por lo que la demandada haciendo referencia a las acreencias mutuas la misma tiene derecho a conservar dichas sumas como producto de la buena gestión realizada. Que con la condena de primera instancia se estaría dando un enriquecimiento sin causa a favor de Colpensiones. En lo que respecta a los seguros indica que los mismos fueron trasladados a un tercero que es la aseguradora que es un tercero de buena fe que no tuvo nada que ver en el contrato de afiliación, por lo que es improcedente dicha devolución, precisando

además que la parte demandante tuvo una reasesoria por lo que se evidencia la buena fe de la entidad y la debida información que se le suministró. Que con la condena de devolver dichos conceptos con el patrimonio propio de la entidad es producto de una responsabilidad civil la cual no era objeto del proceso. Por lo anterior solicita revocar la sentencia en estos puntos.

El apoderado de Colpensiones, interpone recurso de apelación solicitando se revoque en su totalidad la ineficacia además del reconocimiento de la pensión. Lo anterior fundamentado en que de acuerdo a las pruebas del expediente el demandante nació el 29/03/1954 por lo que para la fecha se encuentra en la prohibición de trasladó de la ley 797/93, por faltarle menos de 10 años para adquirir el derecho para la fecha y para el momento en que realizó las solicitudes de traslado. Que para la fecha en que fue realizado el traslado de régimen el 02/03/2000, para esta fecha se hizo en vigencia del decreto 663 de 1993, donde solo se exigía a las AFP atender el formulario con el lleno de los requisitos para los efectos con el fin de demostrar la aceptación o consentimiento razón por la cual el traslado realizado en su momento fue valido con la sola firma del formulario.

Que además dentro del proceso no quedo demostrado los elementos que vician el convencimiento como el error la fuerza y el dolo, partiendo además de que Colpensiones para el momento del traslado no estuvo presente y no quedó demostrado presión o coacción por el asesor del fondo, y prueba de ello es la firma del formulario en aceptación del traslado al RAIS.

Que según el interrogatorio de parte se tiene que para la fecha en que se realizó el traslado no era una persona de débil conocimiento teniendo en cuenta que a trabajado en varias instituciones y para la fecha ocupaba el cargo de docente por lo que en este sentido afirma no operaria la ineficacia del traslado según la sentencia T 422 de 2011.

Que para el asunto no es procedente acceder al regreso automático al RPM sumándole a ello que el demandante no acredita los requisitos de la sentencia SU 062 de 2010, toda vez que según esta se requiere acreditar 15 años de servicios cotizados al 01 de abril de 1994, y solo contaba con 525 semanas para dicha fecha.

En cuanto al reconocimiento de la pensión de vejez indica que la afiliación del demandante fue valida porque no hubo vicio en el consentimiento y la afiliación al RAIS fue valida por lo que existe una falta de legitimación en la causa de Colpensiones para reconocer el derecho pensional. Precisa además que tampoco le asiste derecho al retroactivo y a la mesada pensional reconocida en la sentencia por lo que la misma debe ser reconocida por el RAIS con las diferentes modalidades de pensión de dicho régimen. Por lo anterior solicita se revoque la sentencia y se absuelva a Colpensiones de la ineficacia y de la pensión de vejez.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones presenta alegatos de conclusión manifestando, en síntesis, los mismos argumentos ya esbozados en el recurso de apelación interpuesto.

El apoderado de la parte demandante presenta alegatos de conclusión manifestando en síntesis igualmente los mismos argumentos ya expuestos en la demanda relacionados con la falta del deber de información por parte de la AFP del RAIS indicando además que del interrogatorio de parte no se advierte confesión del demandante que permita desvirtuar la carga probatoria que

debían acreditar las entidades accionadas con respecto al deber de información exponiendo además la línea jurisprudencial de la CSJ en los temas mas importantes del asunto en cuestión, para indicar que es procedente la declaratoria de la ineficacia pretendida. Así mismo argumenta que el demandante cuenta con los requisitos para que le sea reconocida la pensión de vejez al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 758/90, y que la misma se debe causar desde el momento en que se dejo de realizar los aportes conforme lo preceptuado en el artículo 13 de dicha normativa, precisando por último que si son procedente los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100/93.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a trasladar los gastos de administración y los seguros previsionales, y en consulta a favor de Colpensiones si dichas sumas deben ser devueltas de forma indexada y si hay lugar a la devolución de lo deducido para el fondo de garantía de pensión mínima. Así mismo conforme al recurso de apelación deberá determinarse si el demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez a cargo de Colpensiones.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante nació el 29 de marzo de 1954, (página 27), lo que indica que, para el 01 de abril de 1994, tenía mas de 40 años de edad. Así mismo se encuentra probado que se afilió al ISS desde el 15 de julio de 1974, a través del empleador Holasa, alcanzando a tener cotizadas al 31 de marzo de 1994, un total de 252,86 semanas, (página 28 expediente digital), y se trasladó a PROTECCION S.A desde el 01/05/2000, (pagina 58), y que se le brindó una re-asesoria el 28/11/2005, y que solicitó traslado a Colpensiones el 22 de febrero de 2019, la que le fue negada por faltarle menos de 10 años para pensionarse. (página 71 y ss).

Descendiendo al caso particular, se tiene que, en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por el accionante, no se evidencia confesión alguna, pues esta indicó que se trasladó a Protección en el año 2000 cuando la universidad le dio apertura a algunos fondos privados para la asesoría y afiliación a dichos fondos, que les dijeron que el ISS se privatizaría y que le convenia pasarse de régimen porque además en caso de morir el capital pasaría a su familia, que tuvo una reunión que duró mas o menos una hora, que no le dijeron sobre las modalidades de pensión en el RAIS, que no le hablaron del bono pensional, y que nunca le informaron que le convenia trasladarse a Colpensiones.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior **es libre y voluntaria** por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...”* no solo a la multa sino que dice en forma expresa *“... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**”. (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;...”

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene

que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611, 2877 y 4811 de 2020, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PROTECCION S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PROTECCION S.A. aporte, historial de vinculaciones, certificado de afiliación, relación histórica de movimientos, historia laboral e historia laboral válida para bono, formulario de afiliación, y comunicados de prensa; lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia del traslado; y confirmar la orden dada de trasladar a los aportes efectuados por el demandante, incluidos los frutos, rendimientos e intereses.

2. De los efectos de la ineficacia

Respecto a la devolución de la **cuotas o gastos de administración debidamente indexadas** hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 y 1689 de 2019, y teniendo en cuenta que : 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, por ello, las restituciones mutuas se dan por efectos de la nulidad del contrato y no de la ineficacia 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte accionante en esta, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 cuando señala, que la ineficacia genera que las cosas vuelven al estado en que se encontraban, y el Fondo de Pensiones debía devolver “los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

Suma que debe ser debidamente indexada al momento del pago conforme a la sentencia SL 1689 de 2019.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora** hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, porque la CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 se dijo: “La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,.”.

En virtud de lo anterior se ADICIONARÁ la sentencia de primera instancia en el entendido de que las cuotas de administración y seguros previsionales que debe la AFP PROTECCION S.A, por el tiempo en que estuvo afiliado el demandante en dicho fondo debe ser devuelta a COLPENSIONES de forma indexada.

- Frente al **porcentaje de garantía de pensión mínima**, considera la Sala que **debe ser devuelto** a Colpensiones, a teniendo en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a la AFP Protección S.A, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, cada administradora del RAIS deberá mantener en una cuenta separada los recursos que por concepto de “garantía de pensión mínima” recaude de sus

afiliados, por lo que se debe realizar la devolución de dichos porcentajes a Colpensiones, debiendo ADICIONARSE la sentencia en dicho sentido.

3. Del reconocimiento de la pensión de vejez.

Para el caso bajo estudio se tiene que el demandante OMAR DE JESUS ARANGO OTALVARO, nació el 29 de marzo de 1954, (página 27), lo que indica que, para el 01 de abril de 1994, tenía más de 40 años de edad, por lo que es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la ley 100 de 1996, y por lo que puede aplicarse las disposiciones anteriores como lo es para el caso el decreto 758/90, además porque para la vigencia del acto legislativo 01 de 2005, contaba con mas de 750 semanas cotizadas, más concretamente con 775 semanas y para el 31 de diciembre de 2014 ya tenía cumplidos los 60 años de edad y tenía mas de 1.000 semanas cotizadas, esto es, 1.221 semanas para dicha fecha, y 1.477.86 en toda la vida laboral, (según historia laboral visible en la página 164 y ss), cumpliendo de esta forma con las exigencias del artículo 12 del Decreto 758/90 para tener derecho a la prestación de vejez reclamada.

En razón de lo anterior, el demandante cuenta con los requisitos exigidos por el artículo 12 del Decreto 758/90, al haber cumplido los 60 años de edad el **29 de marzo de 2014**, (fls 27), fecha para la cual ya contaba con más de 1.000 semanas cotizadas según quedo anotado.

Ahora, con respecto al disfrute de la pensión debe decirse que los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, son claros en el sentido de distinguir que, el reconocimiento de la pensión se debe dar por parte de la entidad de seguridad social en pensiones cuando se verifiquen los requisitos de edad mínima y semanas cotizadas. En cuanto al disfrute, esto es, el derecho que tiene el afiliado a comenzar a percibir la pensión, sólo se hace efectivo cuando el mismo se retire del sistema, notificado a través de la novedad de retiro, al tenor de lo indicado por el Acuerdo 044 de 1989 (Decreto 3063 de 1989) en su artículo 5, que trata de la desafiliación, del artículo 25 numeral 4, del artículo 64 y 65 acerca de las novedades y sus clases, en el numeral 3 reza “retiro del trabajador cuando cesa el vínculo laboral”, siendo esta la poción adoptada por la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo señalado en la sentencia 16.197 del 14 de noviembre de 2001 M.P. Dr. Luís Gonzalo Toro Correa.

Partiendo de lo descrito considera la Sala que la pensión de vejez debe reconocerse como se indicó en primera instancia a partir del **01 de marzo de 2019**, pues según el reporte de historia laboral aportado por Protección S.A se tiene que este realizó la última cotización para el mes de febrero de 2019, fecha para la cual ya tenía cumplidos todos los requisitos para tener derecho a la prestación solicitada. Lo anterior además por cuanto no operó en fenómeno de la prescripción dado que la reclamación se presentó el 22 de febrero de 2019, y la demandada el 21 de junio del mismo año, por lo que se evidencia que no transcurrió mas de los tres años establecidos en los artículos 488 del C.S.T y 151 del C.P.T.

La pensión debe ser reconocida en 13 mesadas al año al causarse el derecho después del 31 de julio de 2011 al tenor de lo dispuesto por el acto legislativo 01 de 2005.

Así mismo considera la sala debe confirmarse la negación de los intereses moratorios pretendidos en tanto que fue a través de la sentencia del presente proceso ordinario en la cual se dispuso la declaratoria de la ineficacia, y en razón de ello era imposible que Colpensiones en fecha anterior a esta se encontrara obligada a reconocer dicha prestación como para poder argumentar que existió algún tipo de mora por parte de la entidad, sin embargo, tal y como se precisó en primera instancia deberá reconocerse la indexación de las mesadas pensionales adeudadas desde el momento de su causación hasta el momento del pago efectivo de la obligación, debiendo confirmarse la sentencia en este sentido.

Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A, Y COLPENSIONES en la suma de **\$908.526** para cada una de ellas por no haber salido avante los recursos de apelación interpuestos.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO ADICIONAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, en el entendido de que las cuotas de administración y seguros previsionales que deben devolver PROTECCION S.A, por el tiempo en que estuvo afiliado el demandante con dicho fondo debe ser devuelto a COLPENSIONES de forma indexada.

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín en el entendido de que la AFP PROTECCION S.A, debe devolver a COLPENSIONES lo deducido para el fondo de garantía de pensión mínima.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín.

CUARTO: Costas en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A, Y COLPENSIONES en la suma de **\$908.526** para cada una de ellas por no haber salido avante los recursos de apelación interpuestos.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-008-2019-00388-01
Radicado Interno 055-21


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
– SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 062 del 15 de abril
de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>